

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
TRIBUNAL DE APELACIONES
REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA
PANEL IX

JUAN ROMÁN CARRASQUILLO Demandante-Recurrido V. MAPFRE-PRAICO INSURANCE COMPANY, AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO POR CONDUCTO DEL HONORABLE SECRETARIO DE JUSTICIA, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, COMPAÑÍAS ASEGURADORAS "A", "B" Y "C", FULANO DE TAL, SUTANO DE TAL Y MENGANO DE CUAL Demandados-Peticionarios	KLCE202200598	<i>Certiorari</i> procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina Caso Núm.: CA2021CV00327 (403) Sobre: Accidente de Tránsito
---	---------------	--

Panel integrado por su presidente; el Juez Rivera Colón, la Juez Lebrón Nieves y el Juez Rodríguez Flores

Lebrón Nieves, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2022.

El 6 de junio de 2022 compareció ante este Tribunal de Apelaciones, el Gobierno de Puerto Rico (en adelante, Estado), y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (en adelante DTOP), representados por la Oficina del Procurador General de Puerto Rico, mediante *Petición de Certiorari*. Nos solicitan la revisión de la *Orden* emitida y notificada el 20 de abril de 2022 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina.

Por los fundamentos que exponremos a continuación, se expide el recurso de *certiorari* incoado y se revoca la *Orden* recurrida.

I

El caso que nos ocupa tiene su génesis en una acción en daños y perjuicios, incoada el 9 de febrero de 2021 por el señor Juan Román Carrasquillo, en contra del Estado, Mapfre- Praico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (en adelante AAA) y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (en adelante DTOP), por unos alegados daños sufridos debido a un accidente vehicular.

Luego de que las partes demandadas fueron debidamente emplazadas, y tras varias incidencias procesales innecesarias pormenorizar, el 21 de mayo de 2021, el Estado presentó ante el foro *a quo*, una moción de desestimación, al amparo de la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil¹. Tras la oposición de la parte demandante a la aludida moción, el foro primario declinó desestimar la demanda y le concedió término al Estado para presentar su correspondiente alegación responsiva.

El 8 de junio de 2021, la AAA presentó *Contestación a Demanda*. Por su parte, el Estado hizo lo propio, el 16 de junio de 2021. El 17 de junio de 2021, el foro primario emitió *Orden* y señaló la Conferencia Inicial para el 2 de septiembre de 2021.

Así las cosas, el 14 de marzo de 2022, Mapfre presentó una moción de sentencia sumaria, a la que se opuso la parte demandante el 20 de marzo de 2022. El 3 de abril de 2022, la primera instancia judicial declaró No Ha Lugar, la referida moción de sentencia sumaria. Subsiguientemente, el 7 de abril de 2022, la parte demandante solicitó señalamiento de vista.

¹ 32 LPRA Ap V, R. 10.2.

En lo que nos atañe, el 13 de abril de 2022, el Estado incoó *Aviso de Injunction*, mediante el cual planteó que, en virtud del *Confirmation Order* emitido el 18 de enero de 2022, por el Tribunal Federal, en el caso de marras se encuentra vigente un *Injunction Permanente*. Ello, toda vez que, el caso fue presentado antes de la fecha de efectividad del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD). Añadió que, la Junta de Supervisión Fiscal presentó ante el Tribunal Federal un *Notice* en el que notificó la fecha límite para presentar una solicitud de pago por reclamaciones de gastos administrativos.

Acaecidas varias incidencias procesales, incluyendo la concesión de término a las partes para expresar su posición en cuanto a lo solicitado por el Estado, y la correspondiente oposición de la parte demandante, el 20 de abril de 2022, el foro primario emitió la siguiente Orden:

El Tribunal declara No ha lugar. A la solicitud del Estado, de paralizar los procedimientos'[sic] [.]

Se adopta y se ahce [sic]formal [sic] parte de la preente [sic] determinaci[ó]n al aviso de injunction paralizando la litigación del presente caso y sobre el requisito de presentar una solicitud de gastos administrativos ante el tribunal de Título III, que present[ó] la parte demandante.

En desacuerdo con lo determinado por la primera instancia judicial, el 5 de mayo de 2022, el Estado presentó *Moción de Reconsideración*, en la que planteó la falta de jurisdicción del foro primario. El 6 de mayo de 2022 el foro *a quo*, atendió la aludida moción y en lo particular, dispuso:

EL TRIBUNAL DECLARA NO HA LUGAR, LA MOCIÓN EN SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN A ORDEN DECLARANDO "NO HA LUGAR" EL AVISO DE INJUNCTION PRALIZANDO LA LITIGCIÓN DEL PRESENTE CASO Y SOBRE EL REQUISITO DE PRESENTAR UNA SOLICITUD DE GASTOS ADMINISTRATIVOS ANTE EL TRIBUNAL DE TÍTULO III', PRESENTADO POR EL ELA.

Aún inconforme, el 6 de junio de 2022, la Oficina del Procurador General de Puerto Rico, en representación del Gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Transportación y Obras

Públicas presentó el recurso que nos ocupa y le imputó al foro primario la comisión del siguiente error:

Erró el Tribunal de Primera Instancia al asumir jurisdicción sobre la materia y denegar el aviso de *injunction* en virtud del *Confirmation Order*, el cual ordena la paralización del caso de epígrafe y requiere que el reclamante presente una solicitud de gastos administrativos ante la Corte de Título III.

Mediante nuestra *Resolución* del 13 de junio de 2022, le concedimos a la parte recurrida término final e improrrogable hasta el jueves 16 de junio de 2022, para oponerse al recurso de *Certiorari* incoado. Le apercibimos que, transcurrido dicho término, el recurso se entendería perfeccionado para su adjudicación final. No empece al aludido apercibimiento, la parte recurrida no compareció en el término provisto, por lo que, damos el recurso por perfeccionado sin el beneficio de su comparecencia.

En adelante, procedemos a esbozar la norma jurídica que da base a nuestra determinación en el caso de marras.

II

Como sabemos, el 20 de junio de 2016 se convirtió en ley la *Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act* (“PROMESA”). El propósito de esta ley federal fue brindar al Gobierno de Puerto Rico y sus agencias e instrumentalidades acceso a los procesos judiciales de reestructuración de deuda. Véase, R. Emanuelli Jiménez, *PROMESA*, 1ra ed., Puerto Rico, Ed. SITUM, 2017, pág. 48. Concretamente, el Título III de PROMESA permitió que ciertas entidades del Gobierno de Puerto Rico pudieran hacer una petición de quiebra por conducto de la Junta de Supervisión Fiscal.

Al palio de dicha ley, el 3 de mayo de 2017, el Gobierno de Puerto Rico presentó una petición de quiebra ante el Tribunal de los

Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico al amparo del Título III de PROMESA.²

El Plan de Ajuste y el interdicto permanente al amparo del Confirmation Order

La Sección 3 14(b) de PROMESA establece los requisitos generales con los que debe cumplir el Plan Fiscal.³ De conformidad con esta disposición, el 23 de abril de 2021, la JSRP certificó el Plan de Ajuste. Posteriormente, el 18 de enero de 2022, el Tribunal Federal, por conducto de la Honorable Jueza Laura Taylor Swain, emitió, como parte del caso *In Re. Commonwealth of Puerto Rico*, Case No. 17BK3283-LTS, el *Confirmation Order*. El mismo **entró en vigor el 15 de marzo de 2022** (*effective date*). Consecuentemente, el foro federal aprobó el Plan de Ajuste, concluyendo así, la quiebra del Gobierno. Asimismo, se crearon distintas clasificaciones de todas las reclamaciones en contra del Gobierno, estableciéndose el orden o prioridad que se le concederá a estas.

Conforme surge del párrafo 59,⁴ dicho *Confirmation Order* dispuso un mecanismo de interdicto permanente (*Injunction on Claims*) que, desde el 15 de marzo de 2022, sustituyó el efecto de la paralización automática que proveían las secciones 362 y 922 del Código de Quiebras Federal,⁵ y que fueron recogidas en la sección 301 de PROMESA.⁶ El aludido párrafo 59, en lo pertinente, dispone:

59. Injunction on Claims. **Except as otherwise expressly provided in section 92.11 of the Plan, this Confirmation Order, or such other Final Order of the Title III Court that is applicable, all Entities who have held, hold, or in the future hold Claims or any other debt or liability that is discharged or released pursuant to section 92.2 of the Plan or who have held, hold, or in the future hold Claims or any other debt or liability discharged or released pursuant to section 92.2 of the Plan are permanently enjoined, from and after the Effective Date, from (a) commencing or continuing, directly or indirectly, in**

² Véase, *In re: The Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico, as representatives of the Commonwealth of Puerto Rico, et. al.*, No. 17 BK 3283-LTS.

³ 48 U.S.C. sec. 2174.

⁴ Véase, Ap., Anejo X, págs. 139-140.

⁵ 11 U.S.C. secs. 362, 922.

⁶ 48 U.S.C. sec. 2161.

any manner, any action or other proceeding (including, without limitation, any judicial, arbitral, administrative, or other proceeding) of any kind on any such Claim or other debt or liability discharged pursuant to the Plan against any of the Released Parties or any of their respective assets or property, (b) the enforcement, attachment, collection or recovery by any manner or means of any judgment, award, decree, or order against any of the Released Parties or any of their respective assets or property on account of any Claim or other debt or liability discharged pursuant to the Plan, (c) creating, perfecting, or enforcing any encumbrance of any kind against any of the Released Parties or any of their respective assets or property on account of any Claim or other debt or liability discharged pursuant to the Plan, and (d) except to the extent provided, permitted or preserved by sections 553, 555, 556, 559, or 560 of the Bankruptcy Code or pursuant to the common law right of recoupment, asserting any right of setoff, subrogation, or recoupment of any kind against any obligation due from any of the Released Parties or any of their respective assets or property, with respect to any such Claim or other debt or liability discharge pursuant to the Plan. Such injunction shall extend to all successors and assigns of the Released Parties and their respective assets and property. Notwithstanding the foregoing, without prejudice to the exculpation rights set forth in section 92.7 of the Plan and decretal paragraph 61 hereof, nothing contained in the Plan or this Confirmation Order is intended, nor shall it be construed, to be a non-consensual third-party release of the PSA Creditors, AFSCME, and of their respective Related Persons by Creditors of the Debtors.⁷

Consecuentemente, el interdicto dispuesto en el párrafo 59 del *Confirmation Order* tiene el efecto de **mantener paralizadas las reclamaciones pasadas, presentes y futuras de todas las entidades frente al deudor, incluyendo aquellas cuyos hechos fueron posteriores a la petición de quiebra.**

Por consiguiente, del texto del *Confirmation Order* que incorpora el Plan de Ajuste, se desprende con meridiana claridad que, las reclamaciones que se encuentren en etapa de ejecución de sentencia estarán afectadas por el interdicto al consignar su aplicación: *“the enforcement, attachment, collection or recovery by any manner or means of any judgment, award, decree, or order against any of the Released Parties or any of their respective assets*

⁷ Énfasis suplido. Véase, Ap., Anejo X, págs. 139-140.

or property on account of any Claim or other debt or liability discharged pursuant to the Plan".⁸

Asimismo, la sección 92.2 del Plan de Ajuste, según aprobado en el *Confirmation Order* establece, en lo aquí pertinente, lo siguiente:

92.2 Discharge and Release of Claims and Causes of Action:

(a) Except as expressly provided in the Plan or the Confirmation Order, all distributions and rights afforded under the Plan shall be, and shall be deemed to be, in exchange for, and in complete satisfaction, settlement, discharge and release of, all Claims or Causes of Action against the Debtors and Reorganized Debtors **that arose, in whole or in part, prior to the Effective Date, relating to the Title III Cases, the Debtors or Reorganized Debtors or any of their respective Assets, property, or interests of any nature whatsoever, including any interest accrued on such Claims from and after the Petition Date, and regardless of whether any property will have been distributed or retained pursuant to the Plan on account of such Claims or Causes of Action;** provided, however, that, without prejudice to the exculpation rights set forth in Section 92.7 hereof, nothing contained in the Plan or the Confirmation Order is intended, nor shall it be construed, to be a grant of a non-consensual third-party release of the PSA Creditors, AFSCME, and of their respective Related Persons by Creditors of the Debtors. **Upon the Effective Date, the Debtors and Reorganized Debtors shall be deemed discharged and released from any and all Claims, Causes of Action and any other debts that arose, in whole or in part, prior to the Effective Date (including prior to the Petition Date),** and Claims of the kind specified in sections 502(g), 502(h) or 502(i) of the Bankruptcy Code and PROMESA Section 407, whether or not (a) a proof of claim based upon such Claim is filed or deemed filed under section 501 of the Bankruptcy Code, (b) such Claim is allowed under section 502 of the Bankruptcy Code and PROMESA Section 407 (or is otherwise resolved), or (c) the holder of a Claim based upon such debt voted to accept the Plan. For the avoidance of doubt, nothing contained herein or in the Confirmation Order shall release, discharge or enjoin any claims or causes of action against PREPA arising from or related to PREPA issued bonds, including, without limitation, Monoline-issued insurance pertaining thereto, and PREPA is not releasing any claims or causes of action against any non Debtor Entity. Claims and causes of action against PREPA arising from or related to PREPA issued bonds, and releases against PREPA and its assets shall be

⁸ *Íd.*, pág. 139.

addressed in PREPA's Title III case, including, without limitation, any plan of adjustment therein.

(b) Except as expressly provided in the Plan or the Confirmation Order, all Entities shall be precluded from asserting any and all Claims against the Debtors and Reorganized Debtors, and each of their respective Assets, property and rights, remedies, Claims or Causes of Action or liabilities of any nature whatsoever, relating to the Title III Cases, the Debtors or Reorganized Debtors or any of their respective Assets and property, including any interest accrued on such Claims from and after the Petition Date, and regardless of whether any property will have been distributed or retained pursuant to the Plan on account of such Claims or other obligations, suits, judgments, damages, debts, rights, remedies, causes of action or **liabilities. In accordance with the foregoing, except as expressly provided in the Plan or the Confirmation Order, the Confirmation Order shall constitute a judicial determination, as of the Effective Date, of the discharge and release of all such Claims, Causes of Action or debt of or against the Debtors and the Reorganized Debtors pursuant to sections 524 and 944 of the Bankruptcy Code, applicable to the Title III Case pursuant to Section 301 of PROMESA, and such discharge shall void and extinguish any judgment obtained against the Debtors or Reorganized Debtors and their respective Assets, and property at any time, to the extent such judgment is related to a discharged Claim, debt or liability.** As of the Effective Date, and in consideration for the value provided under the Plan, each holder of a Claim in any Class under this Plan shall be and hereby is deemed to release and forever waive and discharge as against the Debtors and Reorganized Debtors, and their respective Assets and property and all such Claims.⁹

⁹ Énfasis suplido. Véase, Ap., Anejo X, págs. 359-360. En ese contexto, la sección 1.126 del Plan de Ajuste, según confirmado por el Tribunal Federal, define “*cause of action*” como:

All claims, actions, causes of action, rights to payment, choses in action, suits, debts, dues, sums of money, accounts, reckonings, bonds, bills, specialties, covenants, contracts, controversies, agreements, promises, variances, trespasses, damages, judgments, remedies, rights of setoff, third-party claims, subrogation claims, contribution claims, reimbursement claims, indemnity claims, counterclaims, and cross claims (including, but not limited to, all claims for breach of fiduciary duty, negligence, malpractice, breach of contract, aiding and abetting, fraud, inducement, avoidance, recovery, subordination, and all Avoidance Actions) **that are pending or may be asserted against any Entity whether arising on or before the Effective Date**, based in law or equity, including, but not limited to, under the Bankruptcy Code, whether known, unknown, reduced to judgment, not reduced to judgment, liquidated, unliquidated, fixed, contingent, matured, unmatured, disputed, undisputed, secured or unsecured and whether asserted or assertable directly or derivatively, in law, equity or otherwise and whether asserted or unasserted as of the Effective Date. (Énfasis suplido). Véase, Ap., Anejo X, págs. 208-209.

Asimismo, el Plan de Ajuste, define “*claim*” como:

Any right to payment or performance, whether or not such right is reduced to judgment, liquidated, unliquidated, fixed, contingent, matured, unmatured, disputed, undisputed, legal, equitable, secured, or unsecured, known or unknown or asserted or unasserted; or any right to an equitable remedy for breach or

De lo anterior se desprende que, los deudores se considerarán liberados de todos los reclamos, causas de acción o pleitos, que surjan *antes* de la fecha de vigencia del Plan de Ajuste. Por igual, el Plan de Ajuste, dispone que, el *Confirmation Order* constituirá una determinación judicial, a partir de su entrada en vigor. Por consiguiente, a partir de ese momento, los deudores quedaron liberados y las reclamaciones descargadas.

Las reclamaciones de gastos administrativos, según el Confirmation Order

A su vez, el párrafo 44 del *Confirmation Order*,¹⁰ advierte sobre la necesidad de presentar una solicitud de gastos administrativos dentro del término de noventa días de la fecha de efectividad del Plan de Ajuste como el único remedio disponible en casos *post-petition*. La JSPR ha determinado que, entre otros casos, los pleitos de daños que atañen reclamaciones *post-petition* deben ser tramitados a través del mencionado procedimiento de gastos administrativos. Sobre el particular, el párrafo 44 dispone lo siguiente:

Administrative Claim Bar Date. The last day to file proof of Administrative Expense Claims shall be ninety (90) days after the Effective Date, after which date, any Administrative Expense Claim, proof of which has not been filed, shall be deemed forever barred, and the Debtors and Reorganized Debtors shall have no obligation with respect thereto; provided, however, that no proof of Administrative Expense Claim shall be required to be filed if such Administrative Expense Claim (a) shall have been incurred (i) in accordance with an order of the Court or (ii) with the written consent of the applicable Government Parties expressly granting such Administrative Expense Claim, (b) is a Professional Claim, (c) is an intergovernmental Claim, (d) is an Administrative Expense Claim of the IRS for the payment of taxes incurred by any of the Debtors during the period from and after the Commonwealth Petition Date, the ERS Petition Date, or the PBA Petition Date, as applicable, (e) relates to actions occurring in the ordinary course during the period from and after the

enforcement of performance, whether or not such right to an equitable remedy is reduced to judgment, fixed, contingent, matured, unmatured, disputed, undisputed, secured, or unsecured, and all debts, suits, damages, rights, remedies, losses, liabilities, obligations, judgments, actions, Causes of Action, demands, or claims of every kind or nature whatsoever, in law, at equity, or otherwise. Véase, Ap., Anejo X, pág. 210.

¹⁰ Véase, Ap., Anejo X, págs. 121-122.

respective Debtors petition date up to and including the Effective Date, (f) relates to a Claim that is subject to the provisions of the ACR Order, including, without limitation, “grievance claims” relating to any of the Debtor's collective bargaining agreements, or (g) is the subject of a pending motion seeking allowance of an administrative expense pursuant to section 503(b) of the Bankruptcy Code as of the entry of this Confirmation Order; and, provided, further, that any such proof of Administrative Expense Claim by a governmental unit shall remain subject to the rights and interests of the Debtors and Reorganized Debtors, as the case may be, and any other party in interest to interpose an objection or other defense to the allowance or payment thereof.¹¹

El Plan de Ajuste define una reclamación de gastos administrativos como:

A Claim against the Debtors or their Assets constituting a cost or expense of administration of the Title III Cases asserted or authorized to be asserted, on or prior to the Administrative Claim Bar Date, in accordance with sections 503(b) and 507(a)(2) of the Bankruptcy Code arising during the period up to and including the Effective Date, and otherwise complying with applicable Puerto Rico law, including, without limitation, subject to the occurrence of the Effective Date, and except as provided in Section 3.5 hereof, Consummation Costs and PSA Restriction Fees; provided, however, that, under no circumstances shall an Administrative Expense Claim include the PBA Administrative Expense Claim.¹²

En consonancia con lo anterior, el *Notice*¹³ presentado el 15 de marzo de 2022, en el procedimiento ante el Tribunal Federal, estableció como fecha límite el **13 de junio de 2022** para que los acreedores presentaran una solicitud de pago por Reclamaciones de Gastos Administrativos, o *Administrative Expense Claims* conforme el párrafo 44 del *Confirmation Order*.¹⁴ Así pues, en el aludido *Notice*, la JSPR consignó que quienes sean requeridos de presentar una Reclamación de Gastos Administrativos y falle en presentarlo en o antes de la fecha límite —13 de junio de 2022— quedará vedado

¹¹ *Íd.*

¹² Ap., Anejo X, pág. 200.

¹³ Ap., Anejo XI, págs. 490-493.

¹⁴ *Íd.* Véase, además, Ap., Anejo XI, págs. 121-122.

permanentemente de hacer valer su reclamación de pago en contra del deudor.¹⁵

En *In re: The Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico, as Representative for the Commonwealth of Puerto Rico*,¹⁶ el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, validó la aplicación de *Administrative Expense Claims* en reclamaciones de daños, en caso de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (“AEE”) bajo los parámetros de PROMESA. Allí, dispuso lo siguiente:

However, as the Board argues, liabilities arising under both the old and new contracts in that hypothetical scenario would also be eligible for administrative expense priority. See *id.* at 42-43 (explaining the different standards for granting priority to postpetition expenses incurred pursuant to assumed pre-petition contracts and those incurred pursuant to unassumed pre-petition contracts); *In re Maiden Mills Indus., Inc.*, 303 B.R. 688, 706 (B.A.P. 1st Cir. 2004) (explaining that liabilities incurred pursuant to post-petition contracts can be treated as administrative expenses if they benefited the estate); see also *In re Klein Sleep Prods., Inc.*, 78 F.3d 18, 25 (2d Cir. 1996) (expressing the view that the business-judgment standard under 11 U.S.C. § 365(a) and the test for granting administrative expense priority to post-petition liabilities under 11 U.S.C. § 503(b) are substantially equivalent).¹⁷

Esbozada la normativa jurídica, procede aplicarla al caso ante nuestra consideración.

III

En esencia, la parte peticionaria nos solicita que, revoquemos el dictamen mediante el cual el foro primario denegó la solicitud de paralización de los procedimientos del presente caso ante dicho foro. Coincidimos con la parte peticionaria en que el foro a quo erró al así proceder.

No albergamos duda de que, a raíz de la aprobación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), actualmente opera en toda su fuerza y

¹⁵ *Íd.* pág. 493.

¹⁶ *In re: The Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico, as Representative for the Commonwealth of Puerto Rico*, 9 F.4th 1(1st Ch. 2021).

¹⁷ (Subrayado suplido). *Íd.*, pág. 15.

vigor, las disposiciones del *Confirmation Order*, emitido el 18 de enero de 2022, por el Tribunal Federal. Este, a su vez, estableció un *Injunction Permanente*, que se encuentra vigente en el caso de marras. Ello, toda vez que, el caso que nos ocupa fue presentado antes de la fecha de efectividad del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD).

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el recurso de *certiorari* incoado y se revoca la *Orden* recurrida. Consecuentemente, decretamos la paralización del caso de epígrafe ante el foro primario.

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
Secretaria del Tribunal de Apelaciones